



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

PROCESO: ACCIÓN DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
RADICACIÓN: 41001-41-05-001-2024-00906-00
ACCIONANTE: DALIA SERRATO DE SANCHEZ
ACCIONADO: COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO – COONFIE- y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

Neiva-Huila, veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)

1. ASUNTO

Corresponde al Juzgado decidir la acción de tutela promovida por la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, actuando a través de apoderado judicial, en contra de **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE-** y **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital e igualdad.

2. ANTECEDENTES

La parte actora relató que el día 12 de mayo del año 2022, el señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE, hoy fallecido, presentó una solicitud de préstamo por un valor de \$104.850.000 ante la **COOPERATIVA COONFIE**, para lo cual la Cooperativa le proporcionó varios formatos de **EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC**, que debía diligenciar y firmar como condición para el otorgamiento del crédito.

Informó que, un día después, es decir el 13 de mayo de 2022, le fue desembolsado el dinero y se suscribió la correspondiente póliza de seguro.

Precisó la parte actora que el señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE, por error involuntario exento de mala fé, no diligenció el documento contentivo de las 14 cláusulas que, en principio, reflejaba su aparente estado actual de salud.

Seguidamente, manifestó que, posterior al deceso del señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE por accidente cerebrovascular, su cónyuge notificó a la COOPERATIVA COONFIE, quien solicitó la historia clínica de su esposo fallecido, argumentando que era necesario para procesar la condonación del crédito, configurándose —en su criterio— un vicio del consentimiento por no haberse requerido la historia clínica de manera formal, a través de derecho de petición.

Informó que, posteriormente, la Cooperativa le comunicó que la póliza no sería efectiva, afirmando que el señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE había declarado falsamente su estado de salud.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

La accionante, a través de apoderado judicial, elevó derechos de petición a las accionadas solicitando la condonación del crédito, quienes manifestaron —según se afirma en el escrito de tutela— que tal solicitud no era procedente, precisando que, conforme a los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio, se omitió información del estado de salud para el ingreso a la póliza, incurriendo en reticencia de la información.

Refirió el apoderado actor que la situación económica de la accionante se ha tornado crítica, dado que a sus 73 años se enfrenta a deudas que amenazan su sustento y que su pensión no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Además, asegura que su estado de salud es delicado, lo que la imposibilita para trabajar, situación que se agudiza por la dependencia económica de sus dos nietos, quienes viven con ella ya que su hijo lleva más de dos años sin opción laboral estable.

Conforme a lo expuesto, solicitó ordenar a la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC, que haga efectiva, a favor de la señora DALIA SERRATO DE SANCHEZ, la póliza adquirida con la aseguradora.

3. PETICIÓN

La parte accionante solicitó que mediante la presente acción constitucional le sean amparados los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la **EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.** hacer efectiva, a favor de la señora DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ, la póliza adquirida por el crédito No. AA002613 otorgado al señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE.

4. ACTUACIÓN PROCESAL

Recibida la acción de tutela, mediante auto del 11 de octubre de 2024, visible en el archivo #006 (expediente electrónico), el Juzgado la admitió, librando los correspondientes telegramas para la notificación a las partes y el traslado a la entidad accionada.

Igualmente, en el transcurso de la acción de tutela el despacho vinculó al trámite al **JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA.**



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

5. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Y VINCULADAS

a. EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.

La accionada, a través de su apoderada judicial, Dra. Claudia Jimena Lasta Fernández, solicitó se declare la improcedencia de la acción constitucional toda vez que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante, ya que la controversia se encuentra en el marco de un contrato mercantil, donde las diferencias deben ser resultas por un juez ordinario especializado. Además, precisó respecto de los hechos relatados por la accionante, que se atiene a lo que se pruebe.

Manifestó que desde el 05 de abril de 2024, la entidad dio respuesta a la solicitud formulada por la COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COONFIE y que el 02 de septiembre de 2024, de la misma manera, respondió a la solicitud de reconsideración a la objeción interpuesta por el apoderado de la señora DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ, comunicando la objeción a la solicitud ante el siniestro Nro. 10293969 caso 192169.

Aclaró que la accionante cuenta con acciones ordinarias a través de las cuales puede debatir las inconformidades que surjan de la negativa de la compañía, solicitando, por tanto, se declare la improcedencia de la acción de tutela, dado el carácter económico e indemnizatorio de la pretensión.

b. COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COONFIE.

La accionada, en respuesta a la acción de tutela, aceptó la veracidad de algunos hechos, como el otorgamiento del crédito al asegurado. Preciso que, una vez concedido el préstamo, se reporta a la aseguradora para que incluya al asegurado en la póliza de vida deudores, donde la cooperativa actúa como tomadora y beneficiaria.

En relación a la afirmación de suministro de documentos para diligencias, aclaró que se proporcionó un formulario preimpreso por la aseguradora, el cual debía ser diligenciado por el asegurado ya que trata de información personalísima; resaltando que es responsabilidad de la aseguradora realizar las indagaciones pertinentes sobre el estado de salud del asegurado.

Confirmó que la historia clínica fue aportada por el asegurado como un requisito para la reclamación del seguro, y que la reclamación efectuada ante la aseguradora fue objeto de objeción por parte de esta última, bajo el argumento de una supuesta reticencia.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

Precisó, sobre sus funciones que, como entidad no aseguradora, su función es contratar seguros con compañías autorizadas, pagando las primas mensualmente y manteniendo vigente la póliza colectiva de vida deudores.

Especificó que la póliza en cuestión fue contratada con LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA OC, quien aceptó al asegurado sin objeciones y recibió el pago de las primas.

Sostuvo que, al realizar la reclamación, recibió una respuesta negativa de la aseguradora por supuesta reticencia, lo cual cuestionó; además, señaló que, de acuerdo con el artículo 1058 del Código de Comercio, las acciones de nulidad relativa no son aplicables si la aseguradora conocía las circunstancias relacionadas con el riesgo citando jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia, que establece la responsabilidad de la aseguradora de verificar el estado de salud del asegurado antes de aceptar la póliza.

Resaltó que la COOPERATIVA – COONFIE-, ante la negativa de la aseguradora, procedió a incoar demanda civil por el incumplimiento del contrato de seguro contra la EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C., para que esta última responda por la póliza suscrita y poder así proceder a condonar la deuda. Precisó que la demanda ordinaria cursa en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva, bajo radicado No. 41001400300420240066300.

Concluyó que no ha vulnerado derechos fundamentales de la accionante, ya que ha actuado conforme a la ley al solicitar la inclusión del asegurado en la póliza, al pagar las primas y al realizar la reclamación.

c. JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL DE NEIVA.

La vinculada manifestó que en análisis al proceso bajo radicado No. 41001400300420240066300, se observa que aún no se ha proferido auto que califique la admisión o inadmisión o rechazo de la demanda y que el proceso se encuentra al despacho desde el 03 de octubre de 2024 para tal fin.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

Proceso Ver Opciones Ayuda

No. Proceso: 41001 - 40 - 03 - 004 - 2024 - 00663 - 00

> NEIVA (HUILA) > Municipal

Información Principal Sujetos Secretaría Despacho Finalización

DEMANDANTE COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHI Cédula:

DEMANDADO LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO Cédula:

Area: 0003 > Civil

Tipo de Proceso: 3001 > Declarativo

Días: 0

Inicial: / / (c)

Anotación: Al Despacho. 5

Ubicación: <<

Actuaciones por las que ha pasado

Actuación	Fecha Actuación	Inicial	Final	Folios	Cuad
Constancia secretarial	3/10/2024				

6. CONSIDERACIONES

La situación fáctica permite colegir que el problema jurídico que se debe resolver en el presente caso es determinar si las entidades accionadas, **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE-** y **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.** vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, al mínimo vital e igualdad de la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**.

Para resolver lo pertinente, el Juzgado analizará en primer lugar la procedibilidad de la acción de tutela.

ANÁLISIS DE PROCEDIBILIDAD

El artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 señala como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela los que siguen: (i) la presunta vulneración de un derecho fundamental por acción u omisión de una autoridad pública y en algunos casos por particulares, (ii) legitimación por activa y por pasiva de los accionados, (iii) la inmediatez y (iv) subsidiariedad¹.

(i) Derecho fundamental

No emerge discusión en torno a los derechos fundamentales invocados, presuntamente vulnerados por la **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE-** y **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**, al debido proceso administrativo, al mínimo vital e igualdad, se encuentran consagrados en la Constitución Política, y que tienen la connotación de fundamentales.

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-275 de 12-04-2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

En cuanto al derecho fundamental al **debido proceso**, la Corte Constitucional, ha manifestado, que *"Se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas"* [29]. Al respecto, es preciso recordar que el alcance de este derecho fundamental ha sido fijado por la jurisprudencia de esta Corporación que lo define como aquel conjunto de garantías señaladas en el ordenamiento jurídico, a través de las que se procura la "protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, **para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia**"². (Resalta el juzgado).

Por su parte, en lo que corresponde al derecho al **mínimo vital**, es dable tener en cuenta que, desde sus inicios, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que *«el Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance»*³. Así, uno de los derechos más característicos de un Estado Social de Derecho es el mínimo vital.

Asimismo, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho al mínimo vital se deriva de los principios de Estado Social de Derecho, dignidad humana y solidaridad, en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad⁴.

Para la Corte, esta garantía constitucional adquiere gran relevancia en *"situaciones humanas límites, relativas a la extrema pobreza y la indigencia, cuando frente a las necesidades más elementales y humanas, el Estado y la sociedad no responden de manera congruente"*⁵

Así las cosas, el máximo Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho al mínimo vital tiene dos dimensiones:

(i) La positiva, que presupone que el Estado y en algunas ocasiones los particulares, cuando se reúnen las condiciones establecidas, *«están obligados a suministrar a la persona que se encuentra en una situación en la cual ella misma no se puede desempeñar autónomamente y que compromete las condiciones materiales de su existencia, las prestaciones necesarias e indispensables para sobrevivir dignamente y evitar su degradación o aniquilamiento como ser humano»*⁶.

(ii) La negativa, como un límite que no puede ser traspasado por el Estado, en materia de disposición de los recursos materiales que la persona necesita para llevar una existencia digna⁷.

² Sentencia T-160 de 2021.

³ Sentencia T-426 de 1992. Reiterada en la sentencia T-716 de 2017

⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-776 de 2003. Reiterada en la sentencia T-716 de 2017.

⁵ Sentencias SU-225 de 1998, T-651 de 2008 y T-716 de 2017, entre otras.

⁶ Sentencia C-776 de 2003

⁷ Sentencias C-776 de 2003 y C-793 de 2009.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

En palabras de la Corte: «El Estado debe asegurar, en primer lugar, las condiciones para que las personas, de manera autónoma, puedan satisfacer sus requerimientos vitales y ello implica que, mientras no existan razones imperiosas, no puede el Estado restringir ese espacio de autonomía de manera que se comprometa esa posibilidad de las personas de asegurar por sí mismas sus medios de subsistencia»⁸.

Respecto al derecho a la **igualdad**, cabe recordar que la Constitución Política consagra este derecho fundamental en su artículo 13. A partir del contenido de esta norma superior, la Corte Constitucional ha determinado que el concepto de igualdad tiene tres dimensiones⁹: (i) igualdad formal, “lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige”; (ii) igualdad material, según la cual se debe “garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos”; y (iii) prohibición de discriminación, lo que significa que “el Estado y los particulares no pueden aplicar un trato diferente a partir de criterios sospechosos contruidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”¹⁰

Asimismo, el máximo órgano constitucional ha precisado que las dos facetas de la igualdad —formal y material— no son excluyentes sino complementarias¹¹. La Carta reconoce que no todas las personas se encuentran en las mismas condiciones, lo que implica que el Estado tiene el deber de adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva. Esto se logra mediante la aplicación de alguno de los siguientes mandatos: “(a) *trato igual a personas en circunstancias idénticas*; (b) *trato paritario a personas que no están en circunstancias idénticas, pero cuyas similitudes son más relevantes que sus diferencias*; (c) *trato diferenciado a personas que no están en circunstancias idénticas, pero cuyas diferencias son más relevantes*; y (d) *trato desigual a personas en circunstancias desiguales y disímiles*.”¹²

Dicho lo anterior, es claro que frente a los derechos invocados se encuentra satisfecho el primer requisito de procedibilidad.

(ii) Legitimación

El artículo 86 de la Constitución establece la facultad que tiene toda persona para interponer la acción de tutela por sí misma o por quien actúe a su nombre, con el fin de reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados. El Decreto 2591 de 1991, establece la legitimidad para interponer este tipo de acciones en su artículo 10º, el cual señala que ésta puede ser presentada (i) directamente por el afectado; (ii) a través de su representante legal; **(iii) por**

⁸ Sentencia C-793 de 2009, reiterada en Sentencia T-144 de 2021.

⁹ Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Corte Constitucional, sentencia C-050 de 2021.

¹² Ibidem.

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

medio de apoderado judicial; iv) por medio de un agente oficioso o v) a través del Ministerio Público.

El presupuesto relacionado con la legitimación por activa se entiende cumplido, toda vez que la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, quien actúa por medio de apoderado judicial legalmente constituido (poder visible en el filio #24 archivo #002), es la titular de los derechos fundamentales invocados, razón por la cual se encuentra legitimada para promover la acción de tutela en su defensa (C.P. art. 86º, Decreto 2591/91 art. 1º y art.10º).

De igual forma, se tiene que la legitimación por pasiva recae en **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE- y LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**, a quienes se le atribuye la presunta vulneración de los derechos fundamentales en discusión por ser las entidades encargadas de gestionar el crédito y la póliza de vida que constituye el tema de litigio.

(iii) Inmediatez

Teniendo en cuenta los hechos que sirven de fundamento fáctico a la presente acción constitucional, esto es, la fecha de la última respuesta negativa sobre el reconocimiento de la póliza de seguro, [02 septiembre de 2024]¹³ y la presentación de la acción de tutela [10 de octubre de 2024], se tiene que ha transcurrido un lapso treinta y ocho (38) días, por lo que, al ser un plazo prudente, se considera cumplido el requisito de inmediatez.

(iv) Subsidiariedad

La acción de tutela, se encuentra consagrada en el artículo 86 de la Carta Política como un mecanismo de defensa excepcional que tiene toda persona contra acciones u omisiones de cualquier autoridad pública, o de los particulares en los casos expresamente establecidos por la ley, que quebrante o amenace vulnerar derechos constitucionales fundamentales, pudiendo el agraviado reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, su restablecimiento o preservación, siempre y cuando se carezca de otro medio de defensa judicial contra ellas. Significa, entonces, que se acude a la citada figura como última medida a efecto de restablecer o preservar un derecho fundamental conculcado, cuando no se disponga de otra vía de defensa eficaz para ese propósito.

A su vez, el artículo en cita, establece que la acción de tutela *"sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable"*¹⁴.

Dado su carácter residual, este mecanismo solamente procede ante i) la inexistencia de otros medios ordinarios de defensa, o cuando, ii) pese a su

¹³ Información visible a los folios 108 a 110 del archivo PDF "0008ContestaciónEquidadSeguros".

¹⁴ Sentencia T-022 de 2017.

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

existencia estos no resulten idóneos y efectivo para la protección de los derechos invocados o iii) se intente como mecanismo transitorio para conjurar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado, por regla general, la improcedencia de la acción de tutela como mecanismo para solicitar el pago de prestaciones económicas y, tratándose de controversias relacionadas con contratos de seguros, la Corte Constitucional ha sostenido que dichos conflictos, en principio, deben ser resueltos ante la jurisdicción ordinaria civil, en tanto el Legislador previó la posibilidad de acudir a varias clases de procesos para solucionarlos, los cuales se encuentran previstos en el Código General del Proceso y dependen del tipo de controversia originada en la relación de aseguramiento¹⁵.

Así pues, el carácter residual de la acción de tutela, exige para su procedencia, el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa diseñados por el Legislador, a menos que estos resulten inadecuados e ineficaces para proteger los derechos fundamentales mencionados, o que quien solicita el amparo de tutela se encuentre expuesto a la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Sobre el particular ha señalado el precedente constitucional lo siguiente:¹⁶

"Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 Superior y 6º del Decreto 2591 de 1991, aunque exista un mecanismo ordinario que permita la protección de los derechos que se consideran vulnerados, existen algunas excepciones al principio de subsidiariedad que harían procedente la acción de tutela. La primera de ellas es que se compruebe que el mecanismo judicial ordinario diseñado por el Legislador no es idóneo ni eficaz para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados; y la segunda; que "siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela"¹⁷."

De igual forma, la Corte Constitucional ha enfatizado que *"En relación con la procedencia de la acción de tutela respecto de los conflictos relativos al pago de pólizas de seguros de vida, el legislador ha dispuesto las vías correspondientes para el trámite de los mismos que, en virtud de su carácter contractual, corresponden, en principio, a los jueces ordinarios en su especialidad civil-comercial. En efecto, los medios judiciales adecuados para tramitar las controversias que puedan originarse con ocasión de un contrato de seguros, son esencialmente los procesos declarativos que, en el contexto del Código General del Proceso, incluirían el verbal o el verbal sumario, según la cuantía (artículos 368 a 385, así como 390 a 394, y 398 del Código General del Proceso) o el proceso ejecutivo (artículo 422 ibídem) en los casos descritos en el artículo 1053 del Código de Comercio"¹⁸.*

Conforme lo anterior, resulta pertinente advertir que, lo que se pretende en la presente acción constitucional, es hacer efectiva una póliza de seguros de vida que

¹⁵ Sentencia T 660 de 2017.

¹⁶ Sentencia T 471 de 2017.

¹⁷ Sentencia T 705 de 2012.

¹⁸ Sentencia T 442 de 2015.



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

se tomó para amparar un contrato de mutuo, asunto que es susceptible de ser resuelto a través de los medios de defensa ordinarios de los que dispone la ley para dicho fin, a los cuales debe acudir la peticionaria a fin de debatir, en el escenario apropiado, el tema de controversia.

Ciertamente, considera el juzgado que en el caso bajo examen no están dados los presupuestos para la procedencia de la acción de tutela como mecanismo principal, toda vez que, el juez de tutela no puede usurpar las funciones del juez natural, quien es el que puede brindar las garantías propias de un proceso regido por la discusión probatoria y con el debido ejercicio del derecho a la contradicción y defensa, por cuanto el proceso verbal previsto en el Código General del Proceso resulta ser el espacio procesal idóneo y eficaz para controvertir, con las formas propias del juicio y ante el juez natural, el cumplimiento de la póliza de seguros de vida.

Ciertamente, de las pruebas allegadas al plenario se avizora que la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, busca hacer efectiva la póliza para garantizar el pago del crédito que el señor ALBERTO SANCHEZ YAGUE (Cónyuge), adquirió con la **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE**. Al respecto, este despacho advierte que la accionante pretende que el juez constitucional dirima controversias inherentes al contrato de seguro, donde se discuten temas de reticencia y la existencia del “nexo de causalidad entre la información omitida y el siniestro”, asuntos que, a las claras, exceden la competencia del juez constitucional, pues, la acción de tutela, por ser un mecanismo sumario, no proporciona el tiempo ni el trámite propicio para discutir tales asuntos con todas las garantías procesales.

Conviene anotar, además, que en este asunto no se evidencia que se esté en presencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción constitucional como mecanismo transitorio, bajo los presupuestos de inminencia, urgencia y gravedad; pues, aunque sea indicada en la demanda que se está afectando el derecho al mínimo vital de una persona adulta mayor, lo cierto es que en los mismos hechos del libelo introductorio se da a conocer que la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ** goza de la pensión de sobrevivencia, prestación que está precisamente encaminada a garantizar a la beneficiaria su mínimo vital y los ingresos necesarios para unas condiciones de vida dignas. En este punto debe anotarse que, conforme al artículo 134 de la Ley 100 de 1993, esta prestación es inembargable, salvo algunos casos como en tratándose de créditos a favor de cooperativas donde, en todo caso, se debe respetar al pensionado el 50% para garantizar su mínimo vital.

En este sentido es igualmente importante señalar este juzgado, de manera oficiosa, procedió a realizar consulta en SISBEN IV¹⁹, vislumbrando que la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, no se encuentra registrada en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales; además, en consulta realizada en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro la

¹⁹ Archivo 0015 expediente electrónico.

JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

suscrita cuenta con una propiedad inmueble en la dirección KR 33 # 20A – 41 de la ciudad de Neiva- Huila (archivo #014 E.E.), lo que permite concluir que tiene garantizadas unas condiciones mínimas de subsistencia.

Ahora bien, resulta importante destacar que, conforme a la manifestación realizada por la **COOPERATIVA – COONFIE-**, ante la negativa de la aseguradora de pagar la póliza, instauró demanda civil contra la **EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C**, por el incumplimiento del contrato de seguro, el cual cursa actualmente en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Neiva, bajo radicado No. 4100140030042024-00663-00; información que refrendó el referido despacho judicial y la cual pudo verificarse, de manera oficiosa, a través de la página web “Consulta de Procesos” de la Rama Judicial, donde consta que la demanda civil fue radicada el 27 de julio de 2024 y que actualmente se encuentra al Despacho para su conocimiento, es decir, que fue presentada mucho antes de interponerse la acción de tutela:

← Regresar al listado

DATOS DEL PROCESO		SUJETOS PROCESALES		DOCUMENTOS DEL PROCESO		ACTUACIONES		
<div>Introduzca fecha inicial</div>		<div>Introduzca fecha fin</div>		<div>▼</div>				
Fecha de Actuación	Actuación	Anotación		Fecha inicia	Fecha finaliza	Fecha de Registro		
2024-10-03	Constancia secretarial	Al Despacho. 5				2024-10-03		
2024-07-27	Radicación de Proceso	Actuación de Radicación de Proceso realizada el 27/07/2024 a las 19:32:34		2024-07-27	2024-07-27	2024-07-27		

En tal sentido, concluye el despacho que la intervención del juez constitucional está vedada, toda vez que la acción de tutela, como se advirtió anteriormente, no constituye un mecanismo alternativo o paralelo para resolver problemas jurídicos que deben ser resueltos al interior del trámite ordinario²⁰, máxime cuando, como en este caso, están en curso los mecanismos ordinarios de protección —proceso ordinario civil—.

Conviene acotar que si bien es cierto en el proceso en mención no fue instaurado directamente por la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, no es menos cierto que este fue promovido en aras de que la aseguradora responda por la póliza de vida del señor ALBERTO SÁNCHEZ YAGUE y así la **COOPERATIVA – COONFIE** pueda proceder a condonar la deuda que actualmente está en cabeza de la accionante, de manera que el objeto del trámite ordinario es el mismo de la acción constitucional.

En ese orden de ideas, tras analizar detenidamente la presente solicitud de amparo, concluye el despacho que la misma es improcedente, habida consideración que las aspiraciones de la señora **DALIA SERRATO DE SANCHEZ**, constituyen el objeto de un proceso ordinario, pues, es en dicho escenario es en donde puede debatirse y declararse lo referente al pago del seguro de vida.

²⁰ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-103 2014.

KR 7 No. 6-03 piso 2 – 8714152
j01mpclneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co
Neiva-Huila



JUZGADO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE NEIVA HUILA

En consecuencia, al contar con otro mecanismo de defensa judicial la actora y en atención al análisis que precede, el Juzgado declarará la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto la misma no puede servir de medio para desplazar los instrumentos ordinarios de defensa previstos en la ley.

En armonía con lo expuesto el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Neiva, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

7. RESUELVE

PRIMERO. - DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, incoada por la señora **DALIA SERRATO DE SÁNCHEZ**, a través de apoderado judicial, en contra de **COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO – COONFIE-** y **LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C.**, conforme a lo motivado.

SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente fallo a las partes intervinientes por el medio más expedito, de conformidad a lo reglado en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991, advirtiéndoles a las partes que disponen del término de tres (3) días para impugnar, contados a partir del siguiente de su notificación.

TERCERO. - ENVIAR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no ser impugnada la sentencia.

CUARTO. - Una vez recibidas las presentes diligencias, procedentes de la Honorable Corte Constitucional, archívense en forma definitiva.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

LILIANA MARÍA VÁSQUEZ BEDOYA

Jueza

C.A.A.O